



Reis. Revista Española de
Investigaciones Sociológicas

ISSN: 0210-5233

consejo.editorial@cis.es

Centro de Investigaciones Sociológicas
España

Cicuéndez Santamaría, Ruth

Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?

Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 160, octubre-diciembre,
2017, pp. 19-37

Centro de Investigaciones Sociológicas
Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99752797002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?

Public Expenditure Preferences in Spain: Self-interest or Values?

Ruth Cicuéndez Santamaría

Palabras clave

Gasto público
 • Interés propio
 • Opinión pública
 • Políticas públicas
 • Predisposiciones simbólicas

Key words

Public Spending
 • Self-Interest
 • Public Opinion
 • Public Policies
 • Symbolic
 Predispositions

Resumen

En este artículo se analizan algunos de los factores que condicionan las preferencias de gasto público de los ciudadanos en España, centrándose en el papel que juegan las motivaciones económicas de los individuos, su ideología y sus valores. Para abordar estas cuestiones, se han aplicado dos teorías: la del interés propio y la de las predisposiciones simbólicas. El análisis empírico demuestra que tanto las características sociodemográficas y económicas como la ideología y las creencias de los ciudadanos influyen en la articulación de las demandas específicas de gasto público. Además, se identifica cuáles son los mejores predictores de las preferencias en cada programa de gasto, concluyendo que el impacto del interés propio y de las predisposiciones simbólicas varía significativamente en función de la naturaleza de las diferentes políticas públicas.

Abstract

This article analyses the factors that condition the public expenditure preferences of citizens in Spain. It focuses on the role that individuals' economic motivations, ideology and values play in forming these preferences. Two theories were selected for this purpose: self-interest theory and symbolic predispositions. An empirical analysis showed that demographic and economic characteristics such as citizens' ideology and values influence how specific demands for public spending are articulated. In addition, the best predictors of the preferences in each public spending programmes are identified. The conclusion is that the impact of self-interest and symbolic predispositions varies significantly depending on the nature of the different public policies.

Cómo citar

Cicuéndez Santamaría, Ruth (2017). «Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 160: 19-38. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.160.19>)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Ruth Cicuéndez Santamaría: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid | ruth.cicuenandez@urjc.es

INTRODUCCIÓN

El análisis de las preferencias ciudadanas de gasto público se ha basado durante mucho tiempo en las doctrinas económicas, especialmente en la teoría de la elección racional, centrándose en el efecto de las motivaciones económicas sobre las demandas sociales. Sin embargo, la sociología y la ciencia política dieron un paso más al introducir en el análisis la ideología y los valores como posibles condicionantes de las actitudes sociopolíticas.

El propósito de este trabajo es avanzar en el estudio del poliédrico proceso de formación de las preferencias colectivas de gasto público. Con esta finalidad, se han aplicado dos teorías, tradicionalmente antagónicas pero que aquí se consideran complementarias, para interpretar las actitudes: el interés propio y las predisposiciones simbólicas¹. Se pretende comprobar si los españoles apoyan prioritariamente aquel gasto público que se destina a las políticas que maximizan sus beneficios personales, o si el nivel de apoyo depende preeminentemente de los posicionamientos ideológicos.

La investigación empírica de los factores que inciden en la formación de las preferencias de gasto público es compleja, y no parece posible identificar una única tipología de variables que permita explicar este proceso en todas las políticas públicas (Monroe, 1979; Jacoby, 1994; Carrillo y Tamayo, 2011). No obstante, gran parte de la literatura académica sostiene que las características sociodemográficas —como expresión de los intereses individuales—, junto con las variables ideológicas, son los principales determinantes de las actitudes hacia el gasto (Sears *et al.*, 1980; Lewis, 1983; Mouritzen, 1987; Jæger, 2006).

En línea con este planteamiento, a lo largo del artículo se intenta responder a dos preguntas: ¿qué variables resultan mejores predictores de la formación de preferencias

de gasto de los españoles a lo largo del tiempo, el interés propio o las predisposiciones simbólicas? ¿El impacto de ambos tipos de condicionantes varía de una política pública a otra? Para ello se mide la correlación entre determinadas características sociodemográficas e ideológicas y la demanda de gasto en diferentes programas.

Lo novedoso de esta investigación es que su diseño metodológico combina el análisis longitudinal, para observar la evolución del efecto de estos factores, con el análisis sectorial por políticas públicas, para identificar qué variables ejercen mayor influencia sobre las preferencias en cada área.

Inicialmente, se exponen las teorías en las que se basa el estudio empírico. A continuación se describe la metodología, los datos y variables utilizadas, y se formulan las hipótesis de investigación. Después, se presentan los resultados y, finalmente, se discuten los hallazgos y limitaciones del trabajo.

MARCO ANALÍTICO: INTERÉS PROPIO Y VALORES

El marco analítico en el que se fundamenta esta investigación considera dos teorías recurrentes en el estudio de la opinión pública. La primera es la «tesis del interés propio», la cual sugiere que las preferencias individuales sobre las políticas públicas se conforman a partir de una evaluación racional de los beneficios y los costes asociados a cada programa (Citrin, 1979: 122). La segunda, denominada «perspectiva de las predisposiciones simbólicas», plantea que las actitudes sociales dependen básicamente de la ideología y los valores internalizados por cada persona durante el proceso de socialización (Eis-meier, 1982; Henderson *et al.*, 1995).

Las motivaciones económicas del individuo: la teoría del interés propio

Resulta preceptivo ofrecer una definición de «interés propio». Sears y Funk (1991: 16) per-

¹ En inglés, «the symbolic politics perspective».

filan un concepto operativo en los siguientes términos: «particular postura actitudinal adoptada en función de (1) el impacto a corto y medio plazo (2) en el bienestar material (3) de la vida personal del individuo (o de su familia cercana)». A tenor de este concepto, el interés se entiende en su acepción económica más individualista, esto es, cuanto más interesada está una persona en determinados programas públicos, más propensa será a desarrollar actitudes positivas hacia los mismos, y a favorecer el incremento del gasto destinado a financiarlos. Esto implica que los ciudadanos tienden a hacer elecciones, políticas o de otro tipo, que puedan aumentar su riqueza, poder o prestigio (Citrin y Green, 1990) o, en el caso de las políticas públicas, elecciones que contribuyan a mejorar su seguridad material.

Fue Birdsall (1965: 238 y ss.) uno de los primeros economistas en considerar que el individuo es, ante todo, un «maximizador de utilidades personales», que intentará elevar al «máximo» su bienestar. Su modelo asume que la demanda privada de gasto se basa en un análisis racional de costes y beneficios de cada programa, y que esta puede explicarse recurriendo a las variables utilizadas en la teoría económica del consumo de bienes: características sociodemográficas, renta, bienes públicos consumidos, etc. (Birdsall, 1965: 283-284).

Utilizando este modelo, estudios sociológicos y politológicos² han aplicado la hipótesis del interés propio para explicar cómo se produce la demanda de gasto público, presuponiendo que «el hombre es egoísta, racional y maximizador de utilidades» (Citrin y Green, 1990: 1). En la misma línea, Sears y Funk (1991: 4) afirman que tres tendencias básicas determinan la formación de las actitudes sociopolíticas: la racionalidad, el ma-

terialismo y el egoísmo; y el interés propio sería una conjunción de las tres.

La tesis básica del autointerés, adaptada al tema investigado, plantea que aquellos ciudadanos que necesiten, actualmente o en el futuro, para sí o para sus familias, determinadas prestaciones públicas serán más partidarios de incrementar los recursos asignados a esas políticas, de acuerdo con la hipótesis de los «underdogs» (Hasenfeld y Rafferty, 1989: 1030).

La verificación empírica de esta popular teoría resulta compleja, obteniéndose resultados dispares en su aplicación. Algunos estudios respaldan dicha tesis, concluyendo que predominan las actitudes utilitaristas y egoístas en las personas (Kristensen, 1982). Otros demostraron que los ciudadanos se mueven, principalmente, por el interés público o altruismo (Kinder y Kiewiet, 1981; Lewin, 1991). Un tercer grupo de publicaciones confirmaron que tanto los comportamientos egoístas como los motivos altruistas son determinantes (Ferris, 1983; Mouritzen, 1987; Funk, 2000). Sea como fuere, una amplia evidencia estadística confirma que las motivaciones económicas no explican *per se* las preferencias de gasto público (Sears y Funk, 1991; Andreß y Heinen, 2001; Linos y West, 2003; Lau y Heldman, 2009), argumentándose incluso que la ideología es un moderador del impacto de los intereses materiales en la configuración de las preferencias (Eismeier, 1982: 136).

El papel de las predisposiciones simbólicas en la formación de preferencias

El auge de las doctrinas económicas contribuyó a relegar las investigaciones focalizadas en el efecto de los valores sobre las actitudes sociales. Pero, desde los años setenta, muchos de los trabajos sobre este tema probaron que, si bien el apoyo al gasto público es una función del interés propio, había una influencia significativa de otras variables, como la ideología y la afiliación a un

² Véanse Sears *et al.* (1980), Feldman (1982), Ferris (1983), Taylor-Gooby (1983), Lewin (1991), Jacoby (1994), Tamayo y Carrillo (2011), entre otros muchos.

partido político. Algunas investigaciones sostenían que el autointerés no es el factor determinante en las demandas de gasto, sino el autopoicionamiento ideológico del ciudadano (Schokkaert, 1987: 182), de forma que sus preferencias deben ser interpretadas en términos de orientación ideológica y filiación política, más que en términos utilitaristas (Lewis, 1983: 161).

De acuerdo con la perspectiva «the symbolic politics», las actitudes concretas hacia las políticas públicas se basarían en la relación simbólica que establece cada persona entre estas políticas y sus valores, interiorizados desde una edad temprana y a largo plazo (Sears *et al.*, 1980: 683). A partir de esta tesis, se identifican cuatro planteamientos relevantes. Primero, las preferencias del individuo son resultado de su socialización durante la infancia, es decir, son respuestas emocionales —*predisposiciones simbólicas*— aprendidas mediante experiencias tempranas de formación (Citrin y Green, 1990: 4). Segundo, las opiniones están determinadas prioritariamente por los valores adquiridos durante esa etapa de socialización y estos encuentran acomodo en una ideología que, por añadidura, condicionará las preferencias (Sears y Funk, 1990: 72-75). Tercero, algunas actitudes sociopolíticas se habrán desarrollado sin que la persona haya hecho evaluación alguna de sus necesidades (Sears *et al.*, 1980: 671). Cuarto, el nivel de apoyo individual al gasto en cada programa correlacionará con su sistema general de orientaciones políticas y creencias ideológicas (Hasenfeld y Rafferty, 1989: 1042).

En conclusión, en el proceso de evaluación se activan en el sujeto una serie de predisposiciones simbólicas subyacentes que actúan a la hora de formalizar sus actitudes y demandas, también en materia de gasto público (Jacoby, 1994). Pero la influencia del posicionamiento ideológico será diferente en cada política, porque tienen características, destinatarios e impactos distintos (Rudolph y Evans, 2005: 662).

Interés propio y predisposiciones simbólicas: uniendo teorías

La literatura internacional sobre opinión pública y Estado de bienestar incorporó como línea de investigación, a partir de los años ochenta, el estudio de los condicionantes de las actitudes hacia el bienestar. Estos trabajos han proporcionado abundante evidencia empírica para probar que los factores ideológicos y el interés propio son los principales predictores de las actitudes hacia el Estado de bienestar en sus diferentes dimensiones (Taylor-Gooby, 1983; Hasenfeld y Rafferty, 1989; Sears y Funk, 1991; Lau y Heldman, 2009). Estos mismos resultados se obtienen en los estudios comparados (Andreß y Heinen, 2001; Blekesaune y Quadagno, 2003; Linos y West, 2003; Jæger, 2006).

Asimismo, investigaciones especializadas en el estudio de las actitudes hacia el gasto han demostrado que, tanto los atributos individuales que expresan el interés propio, como la ideología y las creencias, son los determinantes primordiales que interactúan en el proceso de formación de preferencias (Citrin, 1979; Sanders, 1988; Jacoby, 1994; Rudolph y Evans, 2005). Sobre lo que no hay acuerdo, es si muestra mayor capacidad predictiva el interés propio o las predisposiciones simbólicas (Sears *et al.*, 1980).

Las distintas publicaciones sobre la materia sí coinciden en que las preferencias ciudadanas y sus determinantes varían notablemente en función del sector de política pública (Eismeier, 1982; Rudolph y Evans, 2005), aunque suelen analizar un reducido número de políticas. Incluso si fuera posible identificar una batería de variables que incidan de forma sistemática en las actitudes hacia un área específica, como según Jacoby (1994) sucede en los programas de bienestar, el grado de influencia de cada variable en la formación de preferencias difiere de una política a otra (Monroe, 1979; Sanders, 1988).

En el actual contexto de crisis financiera internacional, la ciudadanía ha modificado

sus demandas de gasto público, otorgando prioridad al incremento de los recursos en los programas de bienestar y promoción del crecimiento económico, frente a otras políticas como medio ambiente o cultura (Diamond y Lodge, 2013: 7), por lo que resulta lógico presuponer que se impondrán los intereses materiales sobre los valores. Diamond y Lodge (2013) estudian la situación en Europa y Brooks y Manza (2013) en Estados Unidos, concluyendo que durante la recesión los ciudadanos apoyan aquellas políticas de gasto en las que tienen un interés directo, especialmente las que conciernen a su bienestar material. También puede ocurrir que en este momento de incertidumbre muchos ciudadanos perciban que resulta imperioso defender el Estado de bienestar y sus valores esenciales, polarizándose las opiniones (Forma, 1999). Además, el impacto de la crisis es desigual, y puede incrementarse el apoyo al gasto en políticas sociales por parte de los más afectados, manteniéndose invariables las preferencias del resto de la población (Margalit, 2013).

En España, acreditados trabajos han descrito las actitudes en materia de gasto público, y en algunos casos se ha investigado sobre las preferencias y sus determinantes (del Pino, 2005; Arriba *et al.*, 2006; del Pino *et al.*, 2011; Carrillo y Tamayo, 2011; Calzada y del Pino, 2013). Se ha constatado que los españoles manifiestan un claro apoyo al aumento continuado de los recursos en casi todas las áreas de política, principalmente en los programas de bienestar (del Pino *et al.*, 2011: 39-42) y que, con oscilaciones, esa tendencia se ha mantenido durante la crisis (Calzada y del Pino, 2013: 179-181). Al mismo tiempo, se ha verificado que determinadas características sociodemográficas, junto con la ideología, son los principales factores explicativos de sus demandas de gasto, al menos en las políticas sociales (Arriba *et al.*, 2006: 78-80). Con todo, en nuestro país el impacto del interés propio y de los valores es limitado y varía perceptible-

mente de una política a otra (Carrillo y Tamayo, 2011: 215-216).

En definitiva, las preferencias son contingentes y están condicionadas por múltiples variables, pero falta por responder: ¿cuáles son los mejores predictores en cada política pública?

METODOLOGÍA: DATOS, VARIABLES E HIPÓTESIS

Con la finalidad de aplicar las teorías descritas al caso español, se han recopilado los datos demoscópicos procedentes de la encuesta anual «Opinión Pública y Política Fiscal», del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de veintisiete estudios cuantitativos de ámbito nacional, con una muestra que oscila entre los 2.400 y 2.500 entrevistados, realizados entre 1985 y 2015³. En el cuadro 1 se describen las variables de análisis, construidas aprovechando preguntas incluidas en los estudios.

La variable dependiente —preferencias individuales de gasto en cada política pública— se elabora utilizando una pregunta relativa a la intensidad de la demanda de gasto en doce programas distintos. Como variables independientes se seleccionan aquellas previamente testadas en diversos trabajos sobre la materia, diferenciando entre las referidas al interés propio y las referidas a valores e ideología.

En consonancia con la teoría del autointerés, se plantea inicialmente la siguiente hipótesis: *las personas con bajos ingresos, de clase social baja, con menor nivel de forma-*

³ En la investigación se han analizado año a año los datos del período comprendido entre 1985 y 2015. Por la extensión del artículo, solo figuran los datos correspondientes a fechas seleccionadas. Asimismo, se han realizado análisis para evidenciar si existía correlación entre la demanda de gasto en algunas políticas y el hecho de ser usuario o beneficiario de esas prestaciones. Para obtener información detallada, contacte con la autora.

CUADRO 1. Descripción de las variables e indicadores

Variables	Preguntas tomadas como indicador	Valores de la variable
Variable dependiente		
Preferencias de gasto en cada política pública	Las administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar servicios públicos y prestaciones. Dígame si cree que dedican demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que mencione	1=Demasiados 2=Los justos 3=Muy pocos
Variables de interés propio		
Tamaño del hábitat	Tamaño del municipio de residencia del entrevistado	1=Menos o igual a 2.000 hab. 2=2.001 a 10.000 hab. 3=10.001 a 50.000 hab. 4=50.001 a 100.000 hab. 5=100.001 a 400.000 hab. 6=400.001 a 1.000.000 hab. 7=Más de 1.000.000 hab.
Sexo	Sexo de la persona entrevistada	1=Hombre 2=Mujer
Edad	¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?	Edad del entrevistado en años (18 a 99 años)
Nivel de estudios	¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha cursado?	1=Sin estudios 2=Primaria 3=Secundaria 4=Formación Profesional 5=Estudios Superiores 6=Estudios de Postgrado
Estatus socioeconómico	Estatus socioeconómico de la persona entrevistada	1=Clase alta/media-alta 2=Nuevas clases medias 3=Viejas clases medias 4=Obreros/as cualificados/as 5=Obreros/as no cualificados/as
Ingresos del hogar	¿De cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos?	Escala en euros dividida en 11 tramos, que van desde «1=ningún tipo de ingresos» a «11= más de 6.000 euros anuales»
Variables ideológicas y valores		
Religiosidad	¿Cómo se define en materia religiosa?	1=Católico/a 2=Creyente de otra religión 3=No creyente 4=Ateo/a
Práctica de la religión	¿Con qué frecuencia asiste a misa u otros oficios religiosos?	1=Casi nunca 2=Varias veces al año 3=Alguna vez al mes 4=Casi todos los domingos/festivos 5=Varias veces a la semana
Autoubicación ideológica	Al hablar de política se utilizan las expresiones izquierda y derecha. En estas casillas que van de izquierda a derecha, ¿en qué casilla se colocaría?	Escala de 1 a 10, donde 1 equivale a extrema izquierda y 10 a extrema derecha
Identificación con un partido político	En las últimas elecciones generales, ¿podría decirme a qué partido o coalición votó?	Listado de partidos políticos que se presentan a las elecciones. Respuestas precodificadas.

ción, los jóvenes y los ancianos, los usuarios habituales de los servicios públicos y los beneficiarios de las políticas de transferencias, la gente con alto riesgo de sufrir pobreza o desempleo y los residentes en municipios de tamaño medio y grande mostrarán mayor apoyo al gasto público dedicado a financiar las principales políticas. Para probar esta hipótesis, se escogen determinadas variables, cuyos mecanismos causales se explican a continuación.

El nivel de ingresos y la clase social son, según la literatura especializada, excelentes indicadores del interés propio (Sanders, 1988; Himmelstein y McRae, 1988). Las personas con menor nivel de ingresos y de bajo estatus socioeconómico, claramente favorecidas por el intercambio impuestos-prestaciones, están más interesadas en que se destinen cuantiosos recursos a los principales programas de gasto que los grupos pertenecientes a la clase alta y con elevados ingresos, los cuales soportan la carga fiscal aunque sea improbable que utilicen tales prestaciones (Svallfors, 2003).

Por otra parte, el grado de formación puede tener efectos tanto positivos como negativos sobre el apoyo al gasto público (Erikson *et al.*, 1989). Los ciudadanos con mayor formación se incorporan más fácilmente al mercado de trabajo, acceden a puestos bien remunerados y sufren menor riesgo de desempleo, por lo que no perciben la necesidad de apoyar las políticas de renta y de redistribución. Sin embargo, es probable que la educación promueva la socialización en valores igualitarios, generando actitudes favorables hacia el gasto en programas de bienestar (Andreß y Heinen, 2001). La mayoría de las investigaciones indican que existe una relación negativa entre formación y apoyo al gasto público en los Estados de bienestar (Linós y West, 2003; Jæger, 2006), pero otras determinan que se produce una correlación positiva (Sears y Funk, 1991).

Otras variables sociodemográficas, invariablemente relacionadas con las preferencias, son sexo y edad. En general, las mujeres y los jóvenes se muestran más favorables al gasto público, especialmente en programas sociales (Sanders, 1988; Carrillo y Tamayo, 2011). Las mujeres demandan en mayor medida que los hombres el incremento de los recursos públicos debido a su posición más vulnerable en el mercado de trabajo y al papel que tradicionalmente han asumido en el cuidado de la familia (Svallfors, 2003). Asimismo, se espera que la juventud apoye mayoritariamente las políticas sociales porque las cohortes jóvenes han disfrutado de elevados niveles de bienestar material, más que las generaciones anteriores, y tienen valores más igualitarios (Inglehart, 1998). Y es lógico suponer que los jóvenes se vean como posibles beneficiarios de los programas para infancia y familia, de las prestaciones por desempleo o de los servicios culturales, mientras que los ancianos podrán utilizar los servicios sociales, las pensiones para la tercera edad o la sanidad. Consecuentemente, estos grupos demográficos serán más favorables al gasto que los adultos de mediana edad (Blekesaune y Quadagno, 2003).

Igualmente, el tamaño del hábitat, indicador del contexto social, condicionará las actitudes, pues los habitantes de municipios más pequeños perciben que deben sufragar numerosas prestaciones a las que tienen difícil acceso por su lugar de residencia (Carrillo y Tamayo, 2011).

Las variables seleccionadas para medir el efecto de valores e ideología son: religiosidad, práctica semanal de la religión, auto-ubicación ideológica e identificación con un partido político. Se propone la subsiguiente hipótesis básica: *las personas de ideología de izquierdas, y/o que votan a partidos de izquierda o centro-izquierda, demandan el aumento del gasto público en mayor medida que las personas de ideología de derechas, y/o que votan a partidos de derecha.* Al mismo tiempo, la religiosidad afectará a las opi-

niones sobre el papel del mercado y del Estado, sobre la solidaridad y la atención a grupos vulnerables.

La asociación entre ideología y preferencias de gasto está bien documentada. Los individuos con ideología de izquierda o que votan a partidos de izquierda son más propensos a apoyar las diferentes políticas públicas, principalmente del área de bienestar (Jacoby, 1991; Shivo y Uusitalo, 1995; Rudolph y Evans, 2005; Arriba *et al.*, 2006). Parece razonable considerar que estos ciudadanos, especialmente proclives a incrementar la intervención pública y afines ideológicamente con el Estado de bienestar, se mostrarán más partidarios de incrementar el gasto social, para asegurar los niveles de calidad de vida que el sistema de bienestar salvaguarda (Lau y Heldman, 2009).

Para evaluar el efecto del interés propio y de las predisposiciones simbólicas sobre las preferencias de gasto se han calculado correlaciones bivariadas entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes, aplicando distintos coeficientes en función de si la variable explicativa era ordinal (ro de Spearman), nominal (coeficiente de contingencia) o de intervalo (r de Pearson), y también se han elaborado tablas de contingencia.

En función de los comportamientos previstos por las teorías del marco analítico, se formulan las siguientes hipótesis concretas de trabajo:

H₁: Las preferencias de los ciudadanos hacia los programas de gasto público dependen de sus intereses individuales, de forma que apoyarán el gasto destinado a aquellos programas que les benefician en la actualidad, o puedan beneficiarles en un futuro, a ellos o a su familia.

H₂: Las preferencias en materia de gasto público dependen esencialmente de la orientación ideológica y de los valores del individuo.

H₃: El impacto, tanto del interés propio como de las predisposiciones simbólicas,

varía de una política a otra; en las políticas económicas y de transferencias de renta tienen mayor influencia los intereses individuales en la formación de preferencias, mientras que en las políticas de soberanía y en las políticas postmaterialistas es mayor el efecto de los valores y la ideología.

H₄: En las etapas de crisis económica prolongada aumenta la influencia del interés propio en la formación de preferencias de gasto público.

RESULTADOS: LOS CONDICIONANTES DE LAS PREFERENCIAS DE GASTO

Los resultados del análisis estadístico sobre el efecto del interés propio y de los valores como predictores de las preferencias de gasto público de los españoles se recogen en la tabla 1.

El primer hallazgo relevante es que, como predice la teoría, los intereses de los individuos influyen en sus preferencias de gasto público, de forma moderada aunque no intrascendente. El autointerés tiene un efecto estadístico limitado sobre las actitudes hacia el gasto en la mayoría de políticas, incluso en aquellos programas directamente relacionados con cuestiones materiales que afectarían a las «utilidades» de los ciudadanos y/o sus familias.

El segundo hallazgo es que la variable que ejerce mayor influencia es el nivel de ingresos del hogar⁴, si bien solo se dispone de datos sobre este indicador desde 2010. Los ingresos familiares correlacionan negativamente con las preferencias de gasto en casi todos los programas, siendo esta asociación más intensa en las políticas de seguridad social y protección al desempleo, lo que encaja con la tesis del interés propio. Otras varia-

⁴ También se incluyeron en el análisis las variables «situación económica personal» —correlaciona estadísticamente con la demanda de gasto en la mayoría de políticas públicas— y «situación laboral».

bles estadísticamente significativas son el nivel de estudios, que afecta a las demandas de gasto en la mayoría de áreas, así como el tamaño del hábitat y la edad, que solo actúan sobre la demanda en determinados programas.

En cuanto al efecto de las predisposiciones simbólicas, hay que señalar, primero, que la ideología condiciona las preferencias en casi todas las políticas públicas, pero su influencia no es muy intensa ni constante. Durante el período considerado, las cuestiones ideológicas inciden, con oscilaciones, sobre la demanda de recursos en diez de los doce programas. Segundo, la identificación con un partido político es mejor predictor de las preferencias que la autoubicación ideológica. Tercero, como se pronosticaba, los ciudadanos que se ubican a la izquierda y/o votan a partidos de izquierda son más favorables al aumento del gasto, salvo en defensa y seguridad ciudadana. Por último, la religiosidad es un factor condicionante en la mayoría de programas.

Con todo, resulta más relevante el examen por políticas públicas, para identificar tendencias significativas.

Las políticas de soberanía

El factor que más influye en las actitudes hacia el gasto en *defensa*, aparte del nivel de ingresos, es la formación, siendo las personas con menos estudios más favorables a aumentar esta partida. En *seguridad ciudadana*, las demandas de recursos también correlacionan negativamente con el nivel de estudios, y positivamente con la edad. En este caso, el sexo se ha convertido en una variable explicativa, las mujeres están actualmente más preocupadas que los hombres por la intervención en orden público.

Llama la atención que defensa y seguridad ciudadana son las únicas materias en que la asociación entre autoubicación ideológica y demanda de recursos, además de ser algo más intensa, es de signo negativo:

los entrevistados con opiniones más positivas son los situados a la derecha del espectro político. Además, el respaldo al gasto militar es mayor entre los electores del PP y de CiU, reduciéndose entre los votantes de IU, mientras que los del PSOE ocupan una posición intermedia. Pese a estas correlaciones, en seguridad ciudadana el peso de las cuestiones ideológicas es cada vez menor, especialmente desde el inicio de la crisis.

En cuanto a los valores, las personas creyentes y que practican la religión apoyan en mayor medida el presupuesto para programas militares y de orden público. Precisar que, salvo las personas más religiosas y quienes se autoubican a la derecha, la opinión pública rechaza mayoritariamente el aumento de los recursos destinados a defensa. En definitiva, las preferencias de gasto en defensa están más determinadas por las predisposiciones simbólicas que por el interés propio. Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana van adquiriendo más importancia los factores sociodemográficos, al tiempo que la influencia de la ideología disminuye.

Por lo que se refiere a *justicia*, los principales condicionantes son el nivel de estudios y el estatus socioeconómico. Concretamente, son las personas de clase alta y media-alta, urbanas e ilustradas, y de edades intermedias, quienes exigen mayor esfuerzo presupuestario en la Administración de justicia. Las preferencias de gasto se explican principalmente en función de la posibilidad de «consumir» justicia, pero las predisposiciones simbólicas apenas tienen impacto.

Las políticas de intervención en la economía

En esta área figuran las políticas de *obras públicas y transportes y comunicaciones*. En la primera, las dos variables más relevantes son el tamaño del hábitat y el sexo: los habitantes de los municipios pequeños y los hombres son más favorables a incrementar

TABLA 1. Influencia del interés propio, los valores y la ideología sobre las preferencias de gasto público de los ciudadanos por áreas de política (1985-2015)

	Tamaño hábitat	Sexo	Edad	Nivel de estudios	Estatus socio económico	Ingresos del hogar	Religio- sidad	Práctica religión	Autoubicación ideológica	Identificación partido pol. ^a
Políticas de soberanía										
<i>Defensa</i>										
1985	-0,100**	0,053*	0,079**	-0,035					0,248**	0,283**
1990	0,001	0,069**	0,040	-0,059**					s.d.	0,288**
1995	0,012	0,030	0,079**	-0,053*	-0,027				0,170**	0,249**
2000	-0,023	0,062**	0,076**	-0,081**	0,018				0,184**	0,257**
2005	0,075**	0,006	0,024	-0,085**	0,021		-0,091**	0,092**	0,170**	0,254**
2010	0,011	0,023	-0,023	-0,067**	0,048*	-0,104**	-0,079**	0,088**	0,146**	0,178**
2015	-0,039	0,010	-0,026	-0,050*	0,005	-0,258**	-0,128**	0,074**	0,208**	0,258**
<i>Seguridad ciudadana</i>										
1985	-0,014	0,052*	0,069**	-0,015					0,261**	0,299**
1990	0,034	0,089**	0,052*	0,013					s.d.	0,317**
1995	0,013	0,033	0,056*	0,012	-0,061**				0,168**	0,309**
2000	0,111**	0,030	0,026	0,020	-0,014				0,057*	0,236**
2005	0,051*	0,033	0,093**	-0,073**	-0,048*		-0,039	0,024	0,024	0,247**
2010	-0,037	0,069**	0,092**	-0,043*	0,021	-0,086**	-0,060**	0,053**	0,056*	0,186**
2015	-0,001	0,030	0,037	-0,065**	0,036	-0,077**	-0,080**	0,013	0,110**	0,148**
<i>Justicia</i>										
1990	0,075**	-0,001	-0,014	0,026					s.d.	0,298**
1995	-0,014	0,020	-0,031	0,052**	-0,089**				0,056*	0,241**
2000	0,052*	0,020	0,020	0,073**	-0,048*				-0,062**	0,193
2005	0,039	0,016	0,067**	0,088**	-0,086**		0,001	0,013	-0,032	0,189
2010	-0,018	0,036	0,036	0,092**	-0,032	0,039	0,024	-0,075*	0,033	0,151**
2015	0,014	0,016	0,025	0,055*	-0,007	-0,043	0,034	-0,036	-0,100**	0,149
Políticas de intervención en la economía										
<i>Obras públicas</i>										
1985	0,100**	-0,019	-0,057*	0,066**					-0,095**	0,204
1990	-0,002	-0,055*	-0,022	0,060**					s.d.	0,242**
1995	-0,093**	-0,023	-0,020	0,030	-0,048*				0,024	0,235**
2000	-0,025	-0,076**	0,068**	0,031	-0,056*				-0,036	0,208**
2005	-0,107**	-0,084**	0,054*	-0,011	0,027		-0,022	0,014	0,007	0,214**
2010	-0,067**	-0,068**	0,037	-0,075**	0,054**	-0,061**	-0,029	0,051*	0,021	0,140*
2015	-0,098**	0,004	0,088**	-0,071**	0,041	-0,085**	-0,049**	-0,001	-0,053**	0,166*

TABLA 1. *Influencia del interés propio, los valores y la ideología sobre las preferencias de gasto público de los ciudadanos por áreas de política (1985-2015) (continuación)*

	Tamaño hábitat	Sexo	Edad	Nivel de estudios	Estatus socio económico	Ingresos del hogar	Religio- sidad	Práctica religión	Autoubicación ideológica	Identificación partido pol. ^a
Transporte y comunicaciones										
1990	0,132**	0,020	-0,055*	0,114**					s.d.	0,306**
1995	-0,038	0,003	-0,020	0,044	-0,033				0,012	0,227*
2000	0,022	-0,011	0,024	0,040	-0,069**				-0,073**	0,191
2005	0,044*	0,005	-0,017	0,051*	-0,029		0,056*	-0,069**	-0,064*	0,207*
2010	-0,054	0,055*	0,085**	-0,084	-0,056*	-0,108**	0,053**	0,021	0,033	0,146*
2015	-0,095**	0,028	0,003	-0,036	0,038	-0,097**	0,011	-0,038	-0,084**	0,172**
Políticas de bienestar										
Vivienda										
1985	0,151**	0,007	-0,047*	0,058*					-0,041	0,184
1990	0,163**	0,027	-0,028	0,055*					s.d.	0,247**
1995	0,115**	-0,014	-0,076**	0,114**	-0,079**				-0,036	0,221
2000	0,103**	0,022	-0,046*	0,066**	-0,008				-0,131**	0,152**
2005	0,105**	-0,001	-0,045*	0,102**	-0,081**		0,086**	-0,097**	-0,029	0,221**
2010	-0,007	0,061**	0,057*	-0,034	-0,009	-0,068**	0,082**	-0,080	-0,051*	0,145*
2015	0,022	0,034	-0,025	-0,025	0,030	-0,093**	0,083**	-0,053	-0,210**	0,206**
Sanidad										
1985	0,224**	-0,003	-0,083**	0,076**					-0,107**	0,261**
1990	0,085**	0,035	-0,058**	0,045*					s.d.	0,259**
1995	0,054*	-0,017	-0,071**	0,120**	-0,099**				0,046	0,241**
2000	0,022	0,017	0,005	0,032	-0,006				-0,056*	0,137*
2005	0,036	0,039	-0,018	0,042*	-0,031		0,041	-0,095**	-0,083**	0,207*
2010	0,024	0,072**	0,008	-0,012	-0,003	-0,047*	0,061**	-0,092**	-0,168**	0,190**
2015	0,026	0,060**	-0,024	-0,018	-0,032	-0,049*	-0,039	-0,092**	-0,176**	0,215**
Enseñanza										
1985	0,182**	0,031	-0,123**	0,153**					-0,006	0,177
1990	0,077**	0,016	-0,115**	0,153**					s.d.	0,273**
1995	0,107**	-0,003	-0,087**	0,157**	-0,085**				0,019	0,264**
2000	0,112**	0,024	-0,017	0,141**	-0,096**				-0,088**	0,206
2005	0,142**	0,012	-0,026	0,147**	-0,119**		0,083**	-0,084**	-0,052*	0,195
2010	0,058**	0,011	-0,163**	0,082**	-0,045**	-0,087**	0,055**	-0,044*	0,054*	0,139
2015	0,050*	0,082**	-0,030	0,024	0,047**	-0,091**	0,087**	-0,054*	0,016	0,193**

TABLA 1. Influencia del interés propio, los valores y la ideología sobre las preferencias de gasto público de los ciudadanos por áreas de política (1985-2015) (continuación)

	Tamaño hábitat	Sexo	Edad	Nivel de estudios	Estatus socio económico	Ingresos del hogar	Religio- sidad	Práctica religión	Autoubicación ideológica	Identificación partido pol. ^a
<i>Seguridad Social/Pensiones</i>										
1990	0,144**	0,034	0,042	-0,007					0,104**	0,243**
1995	0,084**	0,057**	0,023	0,005	-0,031				s.d.	0,270**
2000	0,032	0,053*	0,036	-0,022	0,040				0,022	0,209
2005	-0,006	0,068**	0,106**	-0,125**	0,054*				-0,115**	0,166**
2010	0,010	0,071**	0,018	-0,056*	0,076**	-0,149**	-0,053*	0,015	-0,093**	0,207*
2015	-0,012	0,091**	0,046*	-0,090**	0,079**	-0,102**	-0,034	0,091**	-0,080**	0,186**
<i>Protección por desempleo</i>										
1990	0,207**	0,005	-0,058**	0,021					s.d.	s.d.
1995	0,114**	-0,030	-0,124**	0,005	0,009				-0,039**	0,208
2000	0,084**	0,028	-0,080**	0,051**	0,025				-0,124**	0,265**
2005	0,031	0,047*	-0,091**	0,003	0,031		0,079**	-0,062**	-0,088**	0,146**
2010	0,006	0,060**	-0,060**	-0,114**	0,060**	-0,117**	0,015	-0,046**	-0,066**	0,160**
2015	0,052*	0,046*	-0,002	-0,058**	0,065**	-0,084**	0,062**	-0,170**	-0,170**	0,206**
<i>Cultura</i>										
1995	-0,014	0,020	-0,031	0,052**	-0,089**				-0,146**	0,234**
2000	0,052*	0,020	0,020	0,073**	-0,048*				-0,142**	0,234**
2005	0,039	0,016	0,067**	0,088**	-0,086**		0,086**	-0,116**	-0,119**	0,211*
2010	-0,018	0,036	0,036	0,092**	-0,032	0,039	0,082**	-0,110**	-0,091**	0,175**
2015	0,014	0,016	0,025	0,055*	-0,007	-0,043	0,083**	-0,027	-0,198**	0,206**
<i>Protección del medio ambiente</i>										
2000	0,114**	-0,029	-0,079**	0,151**	-0,087**				-0,164**	0,222*
2005	0,092**	0,011	-0,079**	0,155**	-0,150**		0,081**	-0,107**	-0,101**	0,232**
2010	0,032	0,043	0,105**	-0,048*	-0,114**	0,055**	0,146**	-0,126**	-0,091**	0,151*
2015	0,086**	0,021	-0,050*	0,116**	-0,077**	0,069**	0,153**	-0,018	-0,178**	0,179**

**Sig. $p < 0,010$, *Sig. $p < 0,050$. Correlaciones bivariadas.

^a La variable identificación con un partido político es de carácter nominal, por lo que se ha utilizado el coeficiente de contingencia, el cual varía entre 0 y 1, midiendo la intensidad de la relación pero no la dirección. Esta información se ha complementado con la procedente de las tablas de contingencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios 1465 de 1985, 1880 de 1990, 2187 de 1995, 2394 de 2000, 2615 de 2005, 2841 de 2010 y 3105 de 2015 del CIS, y Carrillo y Tamayo (2011: 209-215).

los recursos para infraestructuras. En la segunda, los principales determinantes de las demandas de gasto son, nuevamente, el hábitat y, después, el nivel de ingresos. Hasta los años noventa, quienes vivían en las ciudades percibían que se destinaban escasos recursos tanto a obras públicas como a

transporte mientras que, actualmente, las comunidades rurales muestran mayor interés en que se dedique más dinero a estos programas, debido a que el esfuerzo inversor se centró en las zonas urbanas.

Se constata que la religiosidad no es un factor condicionante y que la significación de

la orientación ideológica ha aumentado en el caso de transporte y comunicaciones⁵ desde la agudización de la crisis. En definitiva, el efecto de las variables sociodemográficas tiende a atenuarse y, en lo referente a los valores no se distingue una pauta clara. En general, los españoles perciben que se ha hecho una importante inversión en estas infraestructuras, las cuales benefician a casi todos.

Las políticas de bienestar

Comenzando por la política de *vivienda*, se hallaron asociaciones estadísticas que concuerdan con la teoría del autointerés, destacando la edad como el principal predictor. Los jóvenes hasta 34 años, la población urbana y las familias con menos ingresos son los grupos sociodemográficos que reclaman mayor inversión pública. Se ha encontrado también correlación entre esta demanda de gasto y el hecho de vivir de alquiler o en una casa cedida temporalmente a bajo precio por la empresa o la familia.

Asimismo, tiene cierta influencia la religión, no así la práctica de la religión: ateos y agnósticos apoyan en mayor medida el aumento de recursos para vivienda pública. La ideología resulta una variable significativa desde mediados de los noventa, los individuos de izquierdas consideran que el presupuesto es escaso, y las diferencias entre votantes de los distintos partidos son notables. Así, el número de electores de IU que consideran insuficiente la inversión en vivienda supera en 30 puntos porcentuales al número de electores del PP.

En cuanto a *sanidad*, el grado de correlación con las variables explicativas es desigual, oscilando a lo largo del tiempo. Durante los años ochenta y noventa, los habitantes del medio urbano, los adultos entre 25 y 44 años y las personas más instruidas demandaban

más recursos sanitarios. Estos factores no resultan significativos posteriormente y, durante este siglo, el apoyo al gasto en sanidad es mayor entre las mujeres y las familias con pocos ingresos. Se incluyó, como posible predictor, el tipo de servicios sanitarios utilizado —públicos, privados o ambos— pero, existiendo relación estadística, apenas varían las actitudes hacia el gasto en función del consumo de sanidad pública o privada.

Los factores sociodemográficos han sido tradicionalmente los que más han incidido en las preferencias, pero desde 2010 adquiere importancia la religiosidad y, progresivamente, la ideología. Los entrevistados de izquierda, principalmente los votantes de IU, piden mayor financiación para sanidad, en un contexto de reducción presupuestaria.

Otra política esencial del Estado de bienestar es la *enseñanza*. Aquí las demandas de gasto dependen del tamaño del hábitat, el nivel de estudios, la clase social y los ingresos del hogar. Los ciudadanos que viven en municipios grandes⁶, más instruidos, de estatus medio-alto y aquellos con menos ingresos afirman que es necesario incrementar el presupuesto para educación. Curiosamente, ninguno de los indicadores del interés individual considerados —tener hijos en edad escolar, o tener hijos estudiando con una beca, o haber estudiado en un centro público la enseñanza obligatoria— está asociado con las preferencias.

Las actitudes están cada vez más condicionadas por las predisposiciones simbólicas, amén de la influencia del interés propio. La religión es una variable destacada debido, probablemente, al papel de los colegios concertados de la Iglesia católica y a los conflictos relativos a la asignatura de religión en los planes educativos. Pero la orientación ideológica no fue determinante hasta el comienzo de la crisis y, a partir de 2011, hay un cla-

⁵ Los votantes de todos los partidos afirman que los recursos destinados a obras públicas son suficientes.

⁶ En muchas ciudades, la demanda de plazas escolares públicas supera a la oferta, y además es necesario establecer servicios añadidos, como comedor.

ro incremento de la demanda de recursos para educación por parte de los electores de partidos de izquierdas. Ténganse en cuenta los sustanciales ajustes en los programas educativos que ha realizado el gobierno del PP y el debate entre partidos sobre la privatización de la enseñanza. En este sentido, Eismeier (1982: 138) afirmaba que las diferencias ideológicas tienen mayor impacto en las preferencias sobre educación o sanidad, en programas cuyas bases intelectuales y políticas están en el Estado de bienestar.

Mención aparte merecen las dos políticas de transferencia de rentas, *seguridad social* y *protección por desempleo*, que afectan directamente la situación material personal. Las preferencias de gasto en materia de pensiones correlacionan en algún momento con cada indicador del interés propio, aunque no de forma constante ni con la misma intensidad. Los predictores esenciales son: ingresos del hogar, nivel de estudios, estatus socioeconómico y sexo. Es decir, los individuos con escasos recursos, las personas con menos formación y las mujeres (especialmente las viudas) se muestran más partidarios de aumentar tales prestaciones. Además, hasta mediados de la década pasada, el apoyo a este programa era mayor entre los obreros cualificados y no cualificados, pero, a medida que avanza la recesión, crece el apoyo entre las viejas y nuevas clases medias.

Las preferencias de gasto en desempleo están relacionadas con estas mismas variables, aunque el factor primordial es la edad. Como se preveía, la demanda de recursos procede principalmente de los más jóvenes, también de individuos con menor instrucción, de obreros y de personas con menos ingresos, es decir, los colectivos más azotados por el paro. No obstante, durante la crisis todos los grupos sociodemográficos y económicos reclaman un aumento de estas prestaciones.

La identificación con un partido político tiene también cierta incidencia, sobre todo respecto al subsidio por desempleo. Los vo-

tantes de IU y PSOE son fuertemente partidarios de incrementar los recursos y, nuevamente, se observa que el cambio de ciclo económico ha polarizado las posturas de los electores de los distintos partidos.

Finalmente, se enumeran las variables que influyen en las opiniones sobre el gasto destinado a las políticas posmaterialistas, etiqueta referida a la *cultura* y *protección del medio ambiente*. La demanda de gasto en *cultura* depende del tamaño del hábitat, el nivel de estudios, la clase social y el nivel de ingresos. Quienes viven en municipios grandes desean el aumento del presupuesto destinado a cultura —tienen mayor facilidad de acceso—, así como las personas más formadas, de clase alta y aquellas que disponen de bastantes ingresos.

Las actitudes hacia la inversión pública en *protección del medio ambiente* están asociadas con todas las variables seleccionadas, excepto el sexo. Edad y estatus afectan negativamente a la intensidad de la demanda, mientras que el hábitat, la formación y los ingresos familiares tienen una asociación positiva.

Las preferencias en estos dos programas dependen tanto de los intereses como de las predisposiciones simbólicas y, aun teniendo algo más de peso el interés propio, el impacto de los valores tiende a crecer. Religiosidad y práctica de la religión afectan a la demanda de recursos —especialmente en medio ambiente—, así como la ideología y la adscripción a un partido. En ambas políticas, la formación de preferencias responde a los planteamientos del modelo postmaterialista de Inglehart (1998).

DISCUSIÓN: ¿SOMOS LOS ESPAÑOLES EGOÍSTAS EN NUESTRAS PREFERENCIAS DE GASTO PÚBLICO?

La principal conclusión de la investigación presentada es que en España, como sucede en otros países de nuestro entorno, tanto los factores demográficos y socioeconómicos

TABLA 2. *Resumen de los principales determinantes individuales de las preferencias de gasto público de los ciudadanos*

Política de defensa	Política de orden público	Política de justicia	Política de obras públicas
<ul style="list-style-type: none"> - Nivel estudios – - Ingresos del hogar – - Religiosidad – - Práctica religión + - Ideología +: derecha - Identificación partidos derecha 	<ul style="list-style-type: none"> • Edad + • Nivel estudios – • Ingresos del hogar – • Religiosidad – • Práctica religión + • Ideología +: derecha • Identificación partidos derecha 	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel estudios + - Estatus – - Ingresos – 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat – • Sexo – • Ingresos del hogar – • Identificación partidos izquierda
Política de transporte y comunicaciones	Política de vivienda	Política de sanidad	Política de educación
<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño hábitat – - Ingresos – - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat + • Edad – • Nivel estudios + • Ingresos del hogar – • Religiosidad + • Ideología -: izquierda • Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> - Ingresos del hogar – - Práctica religión – - Ideología -: izquierda - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat + • Nivel estudios + • Estatus – • Ingresos del hogar – • Religiosidad + • Práctica religión • Identificación partidos izquierda
Política de seguridad social	Política de desempleo	Política de cultura	Política de medio ambiente
<ul style="list-style-type: none"> - Sexo + - Nivel estudios – - Estatus + - Ingresos del hogar – - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Edad – • Nivel estudios – • Ingresos del hogar – • Práctica religión – • Ideología -: izquierda • Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño hábitat + - Nivel estudios + - Estatus – - Ingresos del hogar + - Religiosidad + - Práctica religión – - Ideología -: izquierda - Identificación partidos izquierda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño hábitat + • Edad – • Nivel estudios + • Estatus – • Religiosidad + • Práctica religión – • Ideología -: izquierda • Identificación partidos izquierda

Nota: los signos + o - indican la orientación de las relaciones causales entre las variables descritas en epígrafes anteriores.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos estadísticos de la tabla 1.

como las creencias y la ideología juegan un papel significativo en la formación de las preferencias de gasto (tabla 2). Esto implica que la teoría del interés propio y la perspectiva de las predisposiciones simbólicas son, desde un punto de vista empírico, válidas para el caso español, aunque con matices.

Los resultados obtenidos son consistentes con las dos primeras hipótesis: los intereses individuales basados en motivaciones económicas (H_1) y, simultáneamente, los valores y la orientación ideológica (H_2) condicionan el grado de apoyo a cada programa de gasto, y ambas explicaciones no son excluyentes. Esta afirmación exige varias puntualizaciones.

Primera, los análisis realizados indican que, si bien las características sociodemográficas y socioeconómicas son predictores relevantes de las demandas de gasto público de los españoles en todas las políticas, fundamentalmente en el área de bienestar pero también en los programas de transferencia de rentas y en justicia, el grado de asociación estadística es moderado, por lo que la capacidad explicativa del modelo es limitada, como confirman estudios previos (Sears y Funk, 1990). Esto no implica que los resultados sean poco significativos. Así, se ha constatado que las personas más beneficiadas por las prestaciones públicas, así como los colectivos socioeconómicamente más vulnerables —bajo nivel de ingre-

sos, individuos con escasa formación, jóvenes, etc.—, apoyan generalizadamente el aumento del gasto público, conclusión que es un lugar común en la literatura sobre el interés propio (véanse, especialmente, Sanders, 1988; Rudolph y Evans, 2005).

Segunda, de acuerdo con Henderson *et al.* (1995: 40), se confirma que el principal predictor de las preferencias es el nivel de ingresos familiares, variable asociada con la demanda de gasto público en las doce políticas estudiadas. Los ciudadanos con menos ingresos desean que se incremente la financiación de prácticamente todos los programas porque valoran que les compensa el intercambio entre impuestos pagados y prestaciones recibidas, mientras que aquellos con altos ingresos no consideran que tengan posibilidad ni necesidad de acceder a tales prestaciones.

Tercera, pese a que trabajos previos sostienen que las actitudes hacia el gasto están condicionadas negativamente por el estatus socioeconómico —indicador asociado con los ingresos y la formación—, porque las personas de clase media y alta son menos favorables a mantener los recursos públicos en programas que no necesitan utilizar (Himmelstein y McRae, 1988; Svallfors, 2003), en España el grado de asociación es relativamente bajo, excepto en enseñanza, pensiones, cultura y medio ambiente. Curiosamente, la clase media, y cada vez más la clase alta, apoyan ciertas políticas por considerarlas beneficiosas para el conjunto de la sociedad, cuestión simbólica que concordaría con el enfoque sociotrópico (Kinder y Kiwet, 1981).

Cuarta, el nivel de formación del individuo, según los estudios revisados, debe correlacionar negativamente con el grado de apoyo al gasto público (Linos y West, 2003; Jæger, 2006), tesis que se cumple en las políticas de soberanía, seguridad social y desempleo, pero existe una correlación positiva en el caso de las políticas postmaterialistas, de enseñanza y de justicia. No obstante, los

efectos del nivel educativo parecen reflejar el estatus socioeconómico más que el apoyo diferenciado a ciertos programas.

Quinta, atendiendo a las premisas de Hasenfeld y Rafferty (1989: 1042) y Sanders (1988: 320-321), se esperaba que mujeres y jóvenes, grupos socioeconómica y laboralmente más vulnerables, fuesen favorables a muchos programas de gasto. Las mujeres solo se muestran más partidarias que los hombres hacia el gasto en seguridad social. Por otra parte, los jóvenes demandan más recursos para vivienda, educación y prestaciones por desempleo, datos consistentes con la teoría del autointerés; pero también para medio ambiente, en línea con las tesis del postmaterialismo (Inglehart, 1998).

En el ámbito de las predisposiciones simbólicas, se ha encontrado evidencia empírica suficiente de que la ideología explica la preferencia por mayor o menor gasto público en numerosas áreas (H_2), si bien su impacto es más débil de lo previsto por algunas publicaciones que consideraban esta variable como el modulador principal de las actitudes hacia el gasto. Los datos indican que el factor esencial es la identificación con un partido político, y que, efectivamente, los ciudadanos que votan a partidos de izquierda apoyan el incremento de los recursos en la mayoría de programas. Estos hallazgos coinciden con los resultados de numerosas investigaciones sobre condicionantes de las actitudes hacia el Estado de bienestar (v.g. Jacoby, 1991; Blekesaune y Quadagno, 2003; Arriba *et al.*, 2006), las cuales concluyen que votar a un determinado partido está asociado con creencias ideológicas arraigadas —el apoyo al intervencionismo público, la defensa del Estado de bienestar o de la equidad (Shivo y Uusitalo, 1995; Funk, 2000)—, las cuales afectan a las preferencias de gasto.

Al mismo tiempo, como se pronosticaba inicialmente (H_3), el impacto del interés propio y de las predisposiciones simbólicas varía significativamente de una política a otra.

Las personas utilizan distintos criterios en la articulación de sus demandas de gasto en cada área, según pone de manifiesto este estudio estadístico. Es lógico suponer que, en esa articulación, incide que sean programas universalistas o sectoriales, prestaciones contributivas o dirigidas a grupos de renta baja, políticas generalistas o de equidad, etc.

Por ejemplo, en las políticas de transferencias de renta o en vivienda, la demanda de gasto proviene fundamentalmente de quienes creen que pueden verse beneficiados por estas prestaciones. En otras políticas, el condicionante primordial son los valores. Así, la demanda de gasto en defensa procede en gran parte de electores de derecha que defienden el refuerzo del área de soberanía por una cuestión de cultura política. Por el contrario, la demanda de gasto en materia de medio ambiente y cultura proviene principalmente de electores de izquierda y de los jóvenes, pues se trata de programas tradicionalmente asociados a los partidos de izquierda y a los valores propios del postmaterialismo (Inglehart, 1998).

Finalmente, el análisis confirma el incremento de la importancia de los «intereses» frente a las «cuestiones simbólicas» durante períodos de crisis graves y prolongadas (H_4), ya que en este contexto muchas personas ven menguada su capacidad económica y pasan a estar en situación de riesgo, convirtiéndose en usuarios de prestaciones públicas que antes no necesitaban. Esto parece ocurrir en aquellas políticas que afectan a la seguridad material de las personas. En paralelo, aparece la tendencia contraria: aumenta el impacto de la ideología en la demanda de gasto en ciertas políticas, especialmente en sanidad, seguridad social, protección del desempleo o educación; políticas del núcleo duro del sistema de bienestar que han sufrido reducciones presupuestarias. Presumiblemente, los electores de derecha apoyarán las medidas de ajuste del partido gobernante, subscribiendo el discurso neoliberal so-

bre la necesidad de reducir la intervención pública. Según Calzada y Del Pino (2013), estos votantes, muchos de ellos con elevados ingresos y de clase media y alta, parecen volverse más reacios a financiar el gasto destinado a los grupos desfavorecidos. Y los electores de izquierdas, tradicionalmente defensores de las políticas sociales, incrementarán su apoyo al gasto en contra de las medidas del gobierno, entendiendo que deben proteger el Estado de bienestar independientemente de sus intereses individuales. Se observa, pues, una polarización de las actitudes debido a la ideología, lo que apoyaría la tesis de Brooks y Manza (2013) relativa a que las crisis producen un giro a la izquierda de buena parte de la opinión pública, ampliándose la demanda de gasto social.

Queda contestar a la pregunta originaria: en la formación de las preferencias de gasto, a los españoles, ¿nos mueve el interés propio o nos condicionan los valores? La respuesta no es concluyente, pues las actitudes son multidimensionales y es complicado separar empíricamente el papel que juegan el autointerés y la ideología en la configuración de las preferencias. Nos movemos por el interés propio porque es atávico en la conducta humana, pero existe un efecto inherente de los valores y la ideología. Para profundizar en este tema se realizará en el futuro un modelo de regresión que analice el impacto combinado de las variables seleccionadas sobre las actitudes, controlando el efecto de la multicolinealidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Andreß, Hans-Jürgen y Heinen, Thorsten (2001). «Four World of Welfare State Attitudes? A Comparison of Germany, Norway and United States». *European Sociological Review*, 17(4): 337-356.
- Arriba, Ana et al. (2006). *Los ciudadanos y el Estado de Bienestar en España (1985-2005)*. Madrid: CIS.
- Bergstrom, Theodore y Goodman, Robert (1973). «Private Demands for Public Goods». *American Economic Review*, 63(3): 280-296.

- Birdsall, William (1965). «A Study of Demand for Public Goods». En: Musgrave, R. A. (comp.). *Essays in Fiscal Federalism*. Washington: The Brookings Institution.
- Blekesaune, Morten y Quadagno, Jill (2003). «Public Attitudes toward Welfare State Policies: A Comparative Analysis of 24 Nations». *Sociological Review*, 19(5): 415-427.
- Brooks, Clem y Manza, Jeff (2013). «A Broken Public? Americans' Responses to the Great Recession». *American Sociological Review*, 78(5): 727-748.
- Calzada, Inés y Pino, Eloísa del (2013). «Algo cambia, algo permanece: los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos durante la crisis (2008-2012)». *Presupuesto y Gasto Público*, 71: 165-186.
- Carrillo, Ernesto y Tamayo, Manuel (2011). «La formación de las preferencias de gasto público: Un análisis comparado por políticas públicas». *Frontera norte*, 23(45): 193-229.
- Citrin, Jack (1979). «Do People Really Want Something for Nothing: Public Opinion on Taxes and Government Spending». *National Tax Journal*, 32(2): 113-129.
- Citrin, Jack y Green, Donald (1990). «The Self-Interest Motive in American Public Opinion». *Research in Micropolitics*, 3(1): 1-28.
- Deacon, Robert y Shapiro, Perry (1975). «Private Preference for Collective Goods Revealed through Voting on Referenda». *American Economic Review*, 65:943-955.
- Diamond, Patrick y Lodge, Guy (2013). «European Welfare States after the Crisis». *Policy Network/ IPPR Paper* (en línea). <http://www.policynetwork.net/publications/4320/European-Welfare-States-after-the-Crisis>, acceso junio de 2013.
- Eismeier, Theodore (1982). «Public Preferences about Government Spending: Partisan, Social, and Attitudinal Sources of Policy Differences». *Political Behaviour*, 4(2): 133-145.
- Erikson, Robert et al. (1989). «Political Parties, Public Opinion, and State Policy». *American Political Science Review*, 83(03): 729-750.
- Feldman, Stanley (1982). «Economic Self-Interest and Political Behavior». *American Journal of Political Science*, 3(26): 446-466.
- Ferris, James (1983). «Demands for Public Spending: An Attitudinal Approach». *Public Choice*, 40(2): 135-152.
- Forma, Pauli (1999). *Interests, Institutions and the Welfare State: Studies on Public Opinion towards the Welfare State*. Turku: STAKES, University of Turku.
- Funk, Carolyn (2000). «The Dual Influence of Self-Interest and Societal Interest in Public Opinion». *Political Research Quarterly*, 53(1): 37-62.
- Hasenfeld, Yeheskel y Rafferty, Jane (1989). «The Determinants of Public Attitudes toward the Welfare State». *Social Forces*, 67(4): 1027-1048.
- Henderson, Tammy L., et al. (1995). «Explaining public opinion toward government spending on child care». *Family relations*, 44(1): 37-45.
- Himmelstein, Jerome y McRae, James (1988). «Social Issues and Socioeconomic Status». *Public Opinion Quarterly*, 52(4): 492-512.
- Inglehart, Ronald (1998). *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: CIS.
- Jacoby, William (1991). «Ideological Identification and Issue Attitudes». *American Journal of Political Science*, 35(1): 178-205.
- Jacoby, William (1994). «Public Attitudes toward Government Spending». *American Journal of Political Science*, 38(2): 336-361.
- Jæger, Mads (2006). «Whats Makes People Support Public Responsibility for Welfare Provision: Self-interest or Political Ideology?». *Acta Sociológica*, 49(3): 321-338.
- Kinder, Donald y Kiewiet, Roderick (1981). «Sociotropic Politics: The American Case». *British Journal of Political Science*, 11(2): 129-161.
- Kristensen, Ole (1982). «Voter Attitudes and Public Spending: Is There a Relationship?». *European Journal of Political Research*, 10(1): 35-52.
- Lau, Richard y Heldman, Caroline (2009). «Self-interest, Symbolic Attitudes, and Support for Public Policy: A Multilevel Analysis». *Political Psychology*, 30(4): 513-537.
- Lewin, Leif (1991). *Self Interest and Public Interest in Western Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Lewis, Alan (1983). «Public Expenditures: Perceptions and Preferences». *Journal of Economic Psychology*, 3(2): 159-167.
- Linós, Katerina y West, Martin (2003). «Self-interest, Social Beliefs and Attitudes to the Redistribution: Re-addressing the Issue of Cross-national Variations». *European Sociological Review*, 19(4): 393-409.

- Margalit, Yotam (2013). «Explaining Social Policy Preferences: Evidence from the Great Recession». *American Political Science Review*, 107(1): 80-103.
- Monroe, Alan (1979). «Consistence between Public Preferences and National Policy Decisions». *American Politics Quarterly*, 7: 3-19.
- Mouritzen, Poul (1987). «The Demanding Citizen: Driven by Policy, Self-Interest or Ideology?». *European Journal of Political Research*, 15(4): 417-435.
- Pino, Eloísa del (2005). *¿Se han modificado las preferencias de los ciudadanos sobre las políticas del Bienestar en España?*. Documento de Trabajo, 05-05. Madrid: Unidad de Políticas Comparadas (CSIC).
- Pino, Eloísa del, et al. (2011). *La administración a juicio de los ciudadanos: actitudes hacia el gasto público*. Madrid: AEVAL.
- Rudolph, Thomas y Evans, Jillian (2005). «Political Trust, Ideology, and Public Support for Government Spending». *American Journal of Political Science*, 49(3): 660-671.
- Sanders, Arthur (1988). «Rationality, Self-Interest, and Public Attitudes on Public Spending». *Social Science Quarterly*, 69(2): 311-324.
- Sears, David et al. (1980). «Self-Interest vs. Symbolic Politics in Policy Attitudes and Presidential Voting». *American Political Science Review*, 74(3): 670-684.
- Sears, David y Funk, Carolyn (1990). «The Limited Effect of Economic Self-Interest on the Political Attitudes of the Mass Public». *Journal of Behavioral Economics*, 19(3): 2-91.
- Sears, David y Funk, Carolyn (1991). «The Role of Self-Interest in Social and Political Attitudes». *Advances in Experimental Social Psychology*, 24(1): 1-91.
- Shockkaert, Erick (1987). «Preferences and Demand for Local Public Spending». *Journal of Public Economics*, 34(2): 175-188.
- Shivo, Tuire y Uusitalo, Hannu (1995). «Attitudes towards the Welfare State. Evidence from Finland». *Scandinavian Journal of Social Welfare*, 4(4): 215-223.
- Svallfors, Stefan (2003). «Welfare Regimes and Welfare Opinions: A Comparison of Eight Western Countries». *Social Indicators Research*, 64(3): 495-520.
- Taylor-Gooby, Peter (1983). «Moralism, Self-interest and Attitudes to Welfare». *Policy and Politics*, 11(2): 145-160.

RECEPCIÓN: 14/09/2016

REVISIÓN: 26/01/2017

APROBACIÓN: 18/04/2017